

BANGLADESH: LA DISIDENCIA BAJO ATAQUE

AMNISTÍA INTERNACIONAL: INFORMACIÓN PARA EL 44 PERIODO DE SESIONES DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL EXAMEN PERIÓDICO UNIVERSAL DE NOVIEMBRE DE 2023

RESUMEN

Este documento se ha preparado para el Examen Periódico Universal (EPU) al que se someterá Bangladesh en abril de 2023. En él, Amnistía Internacional evalúa la aplicación de las recomendaciones formuladas a Bangladesh en el anterior Examen, algunas de ellas relacionadas con la libertad de opinión y de expresión; la libertad de reunión; la prohibición de la tortura o el trato cruel, inhumano o degradante; las ejecuciones extrajudiciales; las desapariciones forzadas; los derechos de las minorías y los pueblos indígenas; y los derechos económicos.

También evalúa el marco nacional de derechos humanos con referencia específica a cambios legislativos como la Ley de Seguridad Digital de 2018, la Ley de Eliminación de la Violencia contra Mujeres y Menores (reforma) de 2020, y la Ley de Pruebas (reforma) de 2022, así como la falta de independencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

En lo que respecta a la situación de los derechos humanos sobre el terreno, el uso de fuerza excesiva por parte de la policía para contener las protestas, la represión cada vez mayor de la disidencia por parte del Estado, la reducción del espacio cívico, el mantenimiento de la pena de muerte, la impunidad persistente por las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales, la marginación de las minorías religiosas y étnicas y de los pueblos indígenas, y los efectos devastadores del cambio climático ejercen un significativo efecto disuasorio sobre el ejercicio de los derechos y las libertades.

La información de Amnistía Internacional finaliza con una serie de recomendaciones a Bangladesh basadas en estas conclusiones.

SEGUIMIENTO DEL EXAMEN ANTERIOR

1. Desde su último Examen en mayo de 2018, Bangladesh ha avanzado poco en el cumplimiento de sus obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.
2. En el último Examen, el gobierno aceptó las recomendaciones para salvaguardar la libertad de expresión, en concreto, mediante la reforma del artículo 57 de la Ley de Tecnologías de la Información y la Comunicación y las disposiciones pertinentes del proyecto de Ley de Seguridad Digital.¹ A pesar de haberse derogado la ley anterior, algunas disposiciones de la recién promulgada Ley de Seguridad Digital siguen coartando la libertad de expresión de forma similar.
3. El gobierno secundó las recomendaciones de intensificar los esfuerzos para prevenir desapariciones forzadas y ²de encausar a los responsables con prontitud, así como de investigar a fondo todas las denuncias de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, y llevar a los responsables ante la justicia.³
4. Lamentablemente, el gobierno se limitó a tomar nota de la recomendación de responder de forma positiva a las solicitudes de visita pendientes de los procedimientos especiales de la ONU, incluida la del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.⁴ Tanto las ejecuciones extrajudiciales como las desapariciones forzadas han continuado en los últimos cinco años con una frecuencia alarmante, por ejemplo, a través de la campaña antidroga del Batallón de Acción Rápida (RAB) lanzada en mayo de 2018, el mismo mes en que se publicó el último EPU de Bangladesh.
5. El gobierno aceptó las recomendaciones acerca de garantizar el derecho a la libertad de reunión pacífica.⁵ Sin embargo, la policía ha seguido reprimiendo protestas pacíficas sobre una serie de cuestiones cívicas —incluidas las de estudiantes de la universidad, escolares, trabajadores/trabajadoras y activistas políticos— mediante gas lacrimógeno, balas de goma, porras, granadas aturdidoras y cañones de agua y, en algunos casos, fuerza letal.⁶

MARCO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

6. Bangladesh ha ratificado todos los tratados básicos de derechos humanos de la ONU, excepto la Convención para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (CED), a pesar de los reiterados motivos de preocupación y recomendaciones del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias. Tampoco ha ratificado la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Lamentablemente, en el Examen anterior Bangladesh se limitó a tomar nota de las recomendaciones respecto a la ratificación de la CED y la Convención sobre los Refugiados.⁷
7. Bangladesh promulgó varias leyes controvertidas, entre las que destaca la Ley de Seguridad Digital,⁸ norma draconiana utilizada por el partido gobernante y sus grupos afines como arma para sofocar la disidencia y coartar la libertad de expresión online.⁹
8. Bangladesh mantiene y sigue aplicando la pena de muerte. La reciente Ley de Estupefacientes de 2018 ¹⁰ establece la pena de muerte o la cadena perpetua para varios delitos no violentos relacionados con drogas. Tras las protestas en todo el país contra la impunidad legal de la violencia sexual en 2020, el gobierno reformó la Ley de Eliminación de la Violencia contra Mujeres y Menores del año 2000 para reinstaurar la pena de muerte para las violaciones cometidas por una sola persona, manteniendo la cadena perpetua como pena mínima obligatoria para todas y cada una de las formas de violación.¹¹
9. La tan esperada reforma no abordó las principales lagunas de protección de la legislación sobre la violación referidas por manifestantes y activistas locales, como la petición de 10 puntos de la Coalición para la Reforma de la Ley de la Violación para que se abordaran mediante reformas legales la definición legal, discriminatoria por motivos de género, de violación; la proporcionalidad de las penas; la falta de un sistema de protección de testigos y un fondo de compensación para sobrevivientes de violación.¹²

10. En sus ciclos más recientes de presentación de informes, Bangladesh ha incumplido sus obligaciones con respecto a cuatro órganos de la ONU creados en virtud de tratados.¹³
11. La ausencia de datos oficiales sólidos, junto con la falta de transparencia, hace que sea especialmente difícil mantener bajo observación los derechos humanos en Bangladesh, pese a la existencia de una Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que aspira a actuar como el principal órgano creado por ley para “proteger, promover y garantizar los derechos humanos” en el país.¹⁴ Especialistas en derechos humanos han criticado la falta de independencia de la CNDH con respecto al partido gobernante.¹⁵ Tanto el presidente actual de la CNDH como la presidenta anterior son burócratas gubernamentales jubilados. La CNDH publicó su último informe, sobre estadísticas sobre violaciones de derechos humanos, en 2018.¹⁶
12. La falta de independencia y las limitadas facultades de investigación de la CNDH afectan gravemente a la observación independiente de los derechos humanos en el país.¹⁷ En marzo de 2021, la CNDH presentó al Ministerio de Justicia una propuesta en la que solicitaba ampliar sus facultades para investigar de forma independiente las quejas presentadas contra la policía, puesto que, según informes, la mayoría de las quejas que ha recibido desde su creación son contra la policía y el Ministerio del Interior rara vez proporciona informes cuando lo pide la Comisión.¹⁸ En marzo de 2023, la propuesta seguía pendiente de estudio.
13. En la primera mitad de diciembre de 2022, la policía llevó a cabo detenciones masivas de 23.968 personas en todo el país, entre las que se encontraban al menos varios centenares de dirigentes y activistas de partidos de la oposición.¹⁹

SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS SOBRE EL TERRENO

Libertad de reunión pacífica

14. Desde el Examen anterior, la policía ha utilizado persistentemente una fuerza innecesaria y desproporcionada para sofocar levantamientos populares y protestas sobre una amplia gama de temas.
15. La policía, junto con personas que formaban parte del ala estudiantil de la Liga Awami gobernante, reprimió brutalmente las protestas lideradas por estudiantes de todo el país sobre la reforma de las cuotas en abril de 2018 y sobre la seguridad vial en agosto del mismo año.²⁰ En manifestaciones contra la visita del primer ministro indio Narendra Modi en marzo de 2021, la policía utilizó fuerza letal que provocó la muerte de al menos 14 manifestantes e hirió a centenares.²¹ Sólo en 2022, la policía utilizó porras, granadas sonoras y balas de goma contra manifestantes estudiantiles en Sylhet,²² disparó balas y botes de gas lacrimógeno para dispersar a trabajadores y trabajadoras de la confección que protestaban en Dacca,²³ lanzó gas lacrimógeno y cañones de agua contra manifestantes de organizaciones de izquierdas,²⁴ y abrió fuego en protestas de activistas del partido de la oposición.²⁵
16. En septiembre de 2022, la policía mató a tiros a un joven activista e hirió a decenas de personas más al abrir fuego en una manifestación contra el poder. En diciembre de 2022, murió un hombre por herida de bala y al menos otras 60 personas resultaron heridas cuando la policía abrió fuego en Dacca contra miles de manifestantes frente a la sede del Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP), el mayor partido de la oposición.²⁶
17. Entre enero de 2019 y diciembre de 2022, según informes, el Estado prohibió 99 protestas en virtud del artículo 144 del Código de Procedimiento Penal.²⁷

Pena de muerte

17. Entre enero de 2018 y diciembre de 2022, Amnistía Internacional registró la ejecución de al menos 13 personas y la imposición de 912 condenas a muerte. En diciembre de 2021, se estimaba que había al menos 2.000 personas condenadas a muerte.²⁸ Sigue imponiéndose la pena de muerte en contravención del derecho y las normas internacionales. Aunque la mayoría de estas condenas son por asesinato, existe una notable tendencia a imponer la pena capital por delitos sin resultado de muerte, como la violación y la tenencia de drogas. Además,

el controvertido Tribunal de Crímenes Internacionales sigue condenando a personas a muerte, incluso *in absentia*, a pesar de los motivos de preocupación que suscita la falta de garantías procesales.

Libertad de expresión

18. Los artículos 25 (publicación de información falsa u ofensiva), 29 (publicación de información difamatoria) y 31 (delito y castigo por deteriorar el orden público) de la Ley de Seguridad Digital se han utilizado como arma para atacar y acosar a las voces disidentes, incluidas las de periodistas, activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos (DDH).²⁹
19. El escritor Mushtaq Ahmed murió en prisión en febrero de 2021 tras pasar 10 meses recluido sin juicio en virtud de la LSD, por haber criticado la respuesta del gobierno a la pandemia de COVID-19.³⁰ Se desestimaron en al menos seis ocasiones sus solicitudes de libertad bajo fianza.
20. El proyecto de Ley de Protección de Datos aspira a introducir nuevas restricciones a la libertad de expresión y amenaza el derecho a la intimidad de las personas.³¹ Las exenciones que, formuladas de manera muy general, otorgada la ley facultarían a las autoridades para acceder a los datos privados de personas e instituciones sin supervisión judicial.

Homicidios extrajudiciales y desapariciones forzadas

21. En mayo de 2018, el Batallón de Acción Rápida (RAB) lanzó una mortífera campaña antidroga después de que el gobierno declarara una política de “tolerancia cero” contra las drogas. Según informes, a finales de 2018, las autoridades bangladeshíes habían matado al menos a 466 personas con el pretexto de tal campaña antidroga, en lo que pareció haber sido una oleada de ejecuciones extrajudiciales.³²
22. Amnistía Internacional investigó siete de estas ejecuciones extrajudiciales de presuntos narcotraficantes y entrevistó a familiares y testigos. En esos casos, se descubrió una clara constante de desaparición forzada seguida de ejecuciones extrajudiciales.³³ Uno de ellos era el de Suleman,³⁴ varón de 35 años que vivía con su hija de 8 años en una cabaña de paja, al que detuvieron, torturaron bajo custodia por dinero y posteriormente mataron en un “tiroteo”.³⁵ Al menos cinco de los testigos que entrevistó Amnistía Internacional revelaron que no habían presenciado los homicidios, sino que la policía les había pedido que prestaran declaraciones ficticias para respaldar la versión policial, es decir, que las muertes se habían producido en supuestos “tiroteos” o “fuego cruzado”.³⁶
23. Según Odhikar, en 2022 murieron al menos 31 personas en ejecuciones extrajudiciales y 21 fueron víctimas de desaparición forzada.³⁷ Aunque dichas cifras representaron una reducción significativa en comparación con las de 2021, estas violaciones graves de derechos humanos persistieron a niveles preocupantes a pesar de las sanciones que impuso Estados Unidos a la policía de Bangladesh en diciembre de 2021.
24. El caricaturista Ahmed Kabir Kishore relató a Amnistía Internacional que había sido sometido a desaparición forzada desde su residencia de Dacca al menos tres días antes de la fecha que consta en los registros oficiales de su detención.³⁸

Tortura y otros malos tratos

25. Ahmed Kabir Kishore comunicó también a Amnistía Internacional que tanto Mushtaq Ahmed como él habían sido torturados bajo custodia³⁹ por uno o varios organismos de seguridad estatales. El 10 de marzo de 2021, Ahmed Kabir Kishore presentó una denuncia ante el Juzgado Metropolitano de lo Penal de Dacca, amparándose en la Ley de Prevención de Muertes y Tortura de Personas Detenidas de 2013, para reclamar un resarcimiento.
26. En agosto de 2022, Netra News expuso detalles e imágenes de satélite de una instalación secreta en el centro de Dacca gestionada por la Dirección General de Fuerzas de Inteligencia (DGFI) —principal agencia de inteligencia militar del Estado— para recluir a víctimas de desaparición forzada.⁴⁰ Varias personas que habían estado encerradas en ella describieron condiciones de reclusión crueles, inhumanas y degradantes.⁴¹ Poco después, apelando a la Ley de Seguridad Digital, el vicepresidente de la unidad de la Liga Awami en el distrito de Rangpur

denunció a Netra News “por difundir propaganda”, así como a una de las personas sobrevivientes al sistema de reclusión secreta que había hecho declaraciones a la agencia de noticias.⁴²

Discriminación

27. Los derechos de las minorías seguían estando amenazados en el país por motivos de religión, etnia y casta.
28. El ansiado proyecto de ley contra la discriminación, presentado ante el Parlamento en abril de 2022, sigue pendiente. De promulgarse, ilegalizaría la discriminación por diversos motivos, como el género, la religión, la etnia, el lugar de nacimiento, la casta y la ocupación. También introduciría un mecanismo de denuncia para que las víctimas de discriminación puedan reclamar una reparación.⁴³
29. Desde 2019, se han producido al menos cinco ataques organizados a gran escala contra minorías hindúes. Estos ataques normalmente conllevan un saqueo deliberado seguido de destrucción violenta, aparentemente en respuesta a publicaciones en las redes sociales que con frecuencia resultan ser falsas. Son ejemplos de ello los ataques colectivos en el distrito de Bhola en octubre de 2019,⁴⁴ en el distrito de Cumilla en noviembre de 2020,⁴⁵ en el distrito de Sunamganj en marzo de 2021,⁴⁶ en Rangpur y varios distritos más durante las celebraciones de Durga Puja en octubre de 2021⁴⁷ y en el distrito de Narail en julio de 2022.⁴⁸
30. En febrero de 2023, se condenó a cinco años de prisión en virtud de la Ley de Seguridad Digital a un joven hindú, Paritosh Roy, por una publicación de su cuenta de Facebook que utilizaron como pretexto los autores de los ataques contra la población hindú de octubre de 2021.⁴⁹ El joven ya había estado recluido ocho meses en régimen de aislamiento con anterioridad.⁵⁰ En marzo de 2023, se condenó a 16 meses de prisión a Iqbal Hossain, acusado de incitar a los ataques contra la población hindú de octubre de 2021 al colocar un ejemplar del Corán en las rodillas de una deidad hindú (lo que posteriormente se fotografió y causó revuelo en las redes sociales).⁵¹ No se tiene constancia de que se haya condenado a los autores de los ataques contra la población hindú.
31. Veinticinco años después de que el gobierno de Bangladesh y el partido Parbatya Chattagram Jana Samhati Samiti firmaran el Acuerdo de Paz de Chittagong Hill Tracts (CHT),⁵² persiste la militarización de la región, en violación del Acuerdo.⁵³ En marzo de 2022, según informes, el activista de los derechos indígenas Nabayan Chakma Milon murió bajo custodia de las fuerzas armadas.⁵⁴ En mayo de 2022, la Comisión Internacional de CHT manifestó su profunda preocupación por el despliegue de nuevas unidades del Batallón de la Policía Armada para sustituirlos campamentos militares vacíos en la región, lo que, en su opinión, violaba el Acuerdo.⁵⁵
32. Los grupos marginados del sudoeste costero de Bangladesh —como el pueblo indígena munda y la población dalit hindú— denunciaron que su acceso al agua se veía gravemente obstaculizado, no sólo por los daños derivados del cambio climático en la infraestructura del agua y el saneamiento, sino también por la discriminación sistémica.⁵⁶ Para la población dalit, esta discriminación estaba motivada por los conceptos de impureza e intocabilidad.

La población refugiada rohinyá

33. Acoger a las personas refugiadas rohinyás continúa suponiendo un reto para Bangladesh. Entre diciembre de 2021 y abril de 2022, según informes, el gobierno cerró y dismanteló unas 30 escuelas dirigidas por la comunidad.⁵⁷ La población refugiada rohinyá denunció que el Batallón de la Policía Armada había detenido a parte del profesorado, que fue puesto en libertad solamente después de confirmar por escrito que iban a dejar de dar clase.⁵⁸
34. El gobierno de Bangladesh persistió en sus planes de reubicar al menos a 100.000 personas refugiadas rohinyás en la remota isla de Bhasan Char, propensa a las inundaciones. En octubre de 2022, se reubicó a 963 personas refugiadas rohinyás en Bhasan Char, con lo que el número total alcanzó las 30.079, según las cifras oficiales.⁵⁹ Hay informes que indican que la policía detuvo a personas refugiadas que intentaban huir de esta apartada isla, lo que hace dudar de la voluntariedad de su reubicación.⁶⁰

RECOMENDACIONES DE ACTUACIÓN DIRIGIDAS AL ESTADO OBJETO DEL EXAMEN

Amnistía Internacional insta al gobierno de Bangladesh a:

Derecho de reunión pacífica

35. Poner fin al uso de la fuerza excesivo o ilegítimo en respuesta a manifestaciones públicas, cumplir sus obligaciones de proteger y facilitar las reuniones pacíficas, y garantizar que cualquier respuesta (restricciones incluidas) sea legítima, necesaria y proporcionada, de conformidad con las normas internacionales.
36. Investigar eficazmente el uso de la fuerza excesivo o ilegítimo contra manifestantes y adoptar las medidas disciplinarias oportunas contra los agentes encargados de hacer cumplir la ley pertinentes, incluidos aquellos con responsabilidad de mando.
37. Poner en libertad a todas las personas detenidas arbitrariamente y recluidas sólo por su afiliación política durante las detenciones masivas practicadas en la primera mitad de diciembre de 2022.

Penas de muerte

38. Hasta la abolición total de la pena de muerte, limitar la imposición de la pena capital a los “más graves delitos” —concepto que, según el derecho internacional de los derechos humanos, se interpreta como homicidio intencional— y establecer una moratoria oficial de las ejecuciones como primer paso hacia la abolición total de la pena de muerte.
39. Garantizar que las personas acusadas de delitos punibles con la pena capital tengan acceso a una representación letrada competente y suficiente, prestando especial atención a las necesidades adicionales de las extranjeras, como servicios de traducción y acceso periódico a la comunicación con sus familiares en otros países.

Libertad de expresión

40. Derogar la Ley de Seguridad Digital de 2018, salvo que sea reformada de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, incluido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que Bangladesh es Estado Parte.
41. Liberar de inmediato y sin condiciones a todas las personas acusadas en virtud de la Ley de Seguridad Digital únicamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión, como periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos, y retirar todos los cargos contra ellas.
42. Garantizar la participación y la consulta públicas, incluidos los miembros de la prensa, en la elaboración de cualquier nueva legislación y política relativas a los derechos humanos online —incluido, entre otros, el proyecto de la Ley de Protección de Datos— con anterioridad a su presentación ante el Parlamento.

Desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales

43. Poner en marcha investigaciones efectivas, independientes e imparciales sobre la conducta del Batallón de Acción Rápida, especialmente en relación con las denuncias de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales perpetradas por sus agentes.
44. Ratificar la Convención para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y aceptar la petición del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de hacer una visita oficial a Bangladesh.

Discriminación

45. Poner en marcha una investigación inmediata, imparcial y exhaustiva sobre los cinco ataques a gran escala contra la población hindú ocurridos en Narail (julio de 2022), Rangpur y otros distritos (octubre de 2021), el distrito de Sunamganj (marzo de 2021), el distrito de Cumilla (noviembre de 2020) y Bholá (octubre de 2019); procesar según las normas internacionales sobre garantías procesales a quienes perpetraron actos violentos y garantizar una reparación a todas las familias hindúes víctimas de la brutalidad.
46. Aplicar plenamente las disposiciones sobre derechos humanos del Acuerdo de Paz de Chittagong Hill Tracts por medio de la desmilitarización de la región, el enjuiciamiento de los responsables de violencia contra dirigentes y personas indígenas, y la protección de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras ancestrales.
47. Llevar a cabo evaluaciones inclusivas y participativas de las necesidades por pérdidas y daños teniendo en cuenta el efecto negativo del cambio climático en el disfrute de los derechos humanos, prestando especial atención a las personas y grupos más afectados por el cambio climático, como el pueblo indígena munda y la población dalit hindú, sin olvidar la región costera del sudoeste del país.
48. Asignar más recursos a los bienes y servicios del sector público, como la sanidad, la educación, la agricultura y la protección social, dando prioridad a las personas más desfavorecidas y marginadas.

Población refugiada rohinyá

49. Garantizar que periodistas, representantes de la ONU y organizaciones de la sociedad civil—incluidas las agencias donantes y humanitarias, y las organizaciones de derechos humanos— tengan acceso sin restricciones a la isla de Bhashan Char para evaluar las condiciones de forma independiente.
50. Garantizar que los niños y las niñas rohinyás tengan acceso a una educación adecuada y oportuna.
51. Respetar el principio de no devolución garantizando que no se traslade a las personas refugiadas rohinyás a ningún lugar—ni siquiera a su país de origen— en el que puedan correr el riesgo de sufrir abusos graves y violaciones de derechos humanos.

Derecho internacional de los derechos humanos

52. Ratificar el Protocolo Facultativo del PIDCP y emitir una declaración en virtud del artículo 22 de la Convención contra la Tortura para que las personas que sufran violaciones de los derechos humanos que se garantizan en estos tratados puedan enviar sus quejas directamente al Comité de Derechos Humanos y al Comité contra la Tortura.
53. Presentar ante los Órganos de Tratados de la ONU todos los informes atrasados como Estado Parte.

ANNEX 1

KEY AMNESTY INTERNATIONAL DOCUMENTS FOR FURTHER REFERENCE

Bangladesh: *Muzzling dissent online*, 12 November 2018, <https://www.amnesty.org/en/documents/asa13/9364/2018/en/>

Bangladesh: *No Space for Dissent – Bangladesh’s Crackdown on Freedom of Expression Online*, 26 July 2021, <https://www.amnesty.org/en/documents/asa13/4294/2021/en/>

Bangladesh: Killed in “crossfire”: Allegations of extrajudicial executions in Bangladesh in the guise of a war on drugs, 4 November 2019, <https://www.amnesty.org/en/documents/asa13/1265/2019/en/>

Bangladesh: *Launch a full investigation into alleged extrajudicial executions*, 12 June 2018, <https://www.amnesty.org/en/documents/asa13/8575/2018/en/>

Bangladesh: *Ensure immediate safety and security of the two Marma sisters with their consultation and consent and launch investigation into the sexual assault on them by members of Bangladesh army*, 6 March 2018, <https://www.amnesty.org/en/documents/asa13/7999/2018/en/>

“Bangladesh: Alleged extrajudicial killings in the guise of a ‘war on drugs’”, 4 November 2019, [amnesty.org/en/latest/press-release/2019/11/bangladesh-killed-in-crossfire/](https://www.amnesty.org/en/latest/press-release/2019/11/bangladesh-killed-in-crossfire/)

Bangladesh: “Rohingya children get access to education”, 28 January 2020, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/01/bangladesh-rohingya-children-get-access-to-education/>

Bangladesh: *Protect the indigenous Mro people from forced eviction*, 22 November 2020, <https://www.amnesty.org/en/documents/asa13/3368/2020/en/>

Bangladesh: *Fully implement rights provisions of the Chittagong Hill Tracts Peace Accord*, 11 December 2020, <https://www.amnesty.org/en/documents/asa13/3407/2020/en/>

Bangladesh: *Letter to Bangladesh’s law minister: end reprisals against journalist Rozina Islam*, 21 June 2022, <https://www.amnesty.org/en/documents/asa13/5720/2022/en/>

Bangladesh: *Feedback on proposed ‘Data Protection Act, 2022’ of Bangladesh*, 27 April 2022, <https://www.amnesty.org/en/documents/asa13/5518/2022/en/>

“Bangladesh: New data protection bill threatens people’s right to privacy”, 27 April 2022, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/04/bangladesh-new-data-protection-bill-threatens-peoples-right-to-privacy/>

Amnesty International: *Any tidal wave could drown us – Stories from the climate crisis*, 3 November 2022, <https://www.amnesty.org/en/documents/IOR40/6145/2022/en/>

“Bangladesh: Authorities must end repression of demonstrations”, 8 December 2022, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/12/bangladesh-authorities-must-end-repression-of-demonstrations/>

“Bangladesh: Authorities must respect right to peaceful protest following bloody crackdowns”, 26 March 2021, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/03/bangladesh-authorities-must-respect-right-to-peaceful-protest-following-bloody-crackdowns-2/>

“Bangladesh authorities must conduct prompt, thorough, impartial, and independent investigations into the death of protesters and respect people’s right to peaceful assembly”, 1 April 2021 <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/04/bangladesh-protests-statement/>

“Bangladesh: Halt relocation of Rohingya refugees to remote island”, 3 December 2020,
<https://www.amnesty.org/en/latest/press-release/2020/12/bangladesh-halt-relocation-of-rohingya-refugees-to-remote-island/>

“Let us speak for our rights” – Human rights situation of Rohingya refugees in Bangladesh, 14 September 2020,
<https://www.amnesty.org/en/documents/asa13/2884/2020/en/>

“Bangladesh: Restore and strengthen capacity of community-led schools in Rohingya camps”, 28 April 2022,
<https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/04/bangladesh-restore-and-strengthen-capacity-of-community-led-schools-in-rohingya-camps/>

“Bangladesh: Urgent emergency measures must aid all impacted by fire in Rohingya Refugee camps”, 6 March 2023,
<https://www.amnesty.org/en/latest/news/2023/03/bangladesh-urgent-emergency-measures-must-aid-all-impacted-by-fire-in-rohingya-refugee-camps/>

The State of the World's Human Rights: Amnesty International's Annual Report 2021/22 (2023), ‘Bangladesh’ entry pp. 85-89 <https://www.amnesty.org/en/latest/research/2022/03/annual-report-202122/>

ANNEX 2

MATRIX OF RECOMMENDATIONS FROM THE PREVIOUS CYCLE, WITH COMMENTS ON PROGRESS

Recommendation	Position	Full list of themes	Assessment/comments on level of implementation
<i>Theme: A41 Constitutional and legislative framework</i>			
147.68 Review all existing and proposed legislation relating to freedom of expression, both online and offline, to ensure that it fully complies with the relevant international standards (Ireland); Source of position: A/HRC/39/12 - Para. 147	Supported	A41 Constitutional and legislative framework D43 Freedom of opinion and expression Affected persons: - general - media	Partly implemented Bangladesh has repealed Section 54, 55, 56, 57 and 66 of the Information and Communication Technology Act. However, the Digital Security Act introduced in October 2018 expanded some of the provisions taken out from ICT Act into several sections in DSA with punishment up to life imprisonment.
148.3 Enforce constitutional provisions safeguarding freedom of expression, including by amending section 57 of the Information and Communication Technology Act and relevant provisions of the draft Digital Security Act (Australia); Source of position: A/HRC/39/12/Add.1 - Para. 1	Supported	A41 Constitutional and legislative framework D43 Freedom of opinion and expression Affected persons: - general - media	Cosmetic changes were made to the Digital Security Act before it was introduced in October 2018. However, the DSA as it was passed in 2018 contains provisions that violate international human rights law standards.
148.13 Review and amend the laws that restrict freedom of expression, such as section 57 of the 2006 Information and Communication Technology Act (Mexico);	Supported	A41 Constitutional and legislative framework D43 Freedom of opinion and expression Affected persons: - general - media	Bangladesh had at least 433 prisoners under the Digital Security Act as of 11 July 2021, mostly held on allegations of

<p>Source of position: A/HRC/39/12/Add.1 - Para. 1</p>		<p>- human rights defenders</p>	<p>publishing “false or offensive information” under Section 25.</p> <p>Amnesty International has found a concerning pattern in which the authorities weaponized Sections 25 (publication of false or offensive information), 29 (Publication of defamatory information), and 31 (Offence and punishment for deteriorating law and order) of the Act to target and harass critical voices.</p> <p>According to a report by human rights group Ain o Salish Kendra (ASK), 2,249 cases were filed under the DSA over the course of the year before the Cyber Tribunals in Dhaka, Rajshahi and Chittagong divisions alone. Article 19 documented media reports of 114 DSA cases between January and November and found that the vast majority (78 cases) were filed in connection with posts on social media. It also found that 46 out of the 114 cases were filed by individuals associated with the ruling party.</p> <p>According to the country’s Department of Prison, Bangladesh had 185 prisoners under Section 25, 162 persons under Section 29 and 163 persons under Section 31 as of 11 July 2021. One prisoner may have been implicated in multiple charges.</p>
<p>147.71 Ensure democratic space for all political actors, including the implementation of domestic laws, without restrictions on the exercise of the rights to freedom of expression and of peaceful assembly (Switzerland); Source of position: A/HRC/39/12 - Para. 147</p>	<p>Supported</p>	<p>A41 Constitutional and legislative framework D43 Freedom of opinion and expression D44 Right to peaceful assembly Affected persons: - general - media - judges, lawyers and prosecutors</p>	<p>Not yet implemented</p> <p>Bangladesh shut down the internet six times in 2022 as a ‘weapon of control’ during the BNP’s protest rallies⁶¹ Between January 2019 to December 2022, the state reportedly banned 99 protests under</p>

<p>147.7 Bring legislation into conformity with the obligations under the International Covenant on Civil and Political Rights by repealing restrictive provisions that limit the rights of journalists, human rights defenders and civil society organizations to freedom of expression and free speech (Latvia); Source of position: A/HRC/39/12 - Para. 147</p>	<p>Supported</p>	<p>A41 Constitutional and legislative framework D43 Freedom of opinion and expression H1 Human rights defenders Affected persons: - general - media - human rights defenders</p>	<p>Section 144 of Criminal Procedure Code.⁶²</p> <p>In March 2021, the police used lethal force in demonstrations against the visit of Indian Prime Minister Narendra Modi, leading to the deaths of at least 14 protestors and injuring hundreds of others.⁶³</p> <p>In September 2022, police shot to death Shaon Mahmud alias Akash, a young activist from the Jatiyatabadi Jubo Daland and injured dozens more after opening fire on demonstrators at a protest against power cuts and rising food costs.⁶⁴</p>
<p>Theme: B51 Right to an effective remedy</p>			
<p>147.89 Investigate all cases of murder and violence against journalists and bloggers and bring the perpetrators to justice (Slovakia); Source of position: A/HRC/39/12 - Para. 147</p>	<p>Supported</p>	<p>B51 Right to an effective remedy B52 Impunity A47 Good governance Affected persons: - media</p>	<p>Not yet implemented</p> <p>Photojournalist Shafiqul Islam Kajol was not seen for 53 days after he left his office on 10 March 2020, raising concerns that he was forcibly disappeared by the authorities. A case of disappearance was filed by his son on 18 March 2020. Instead of investigating into his suspected enforced disappearance, Shafiqul Islam Kajol was arrested under Digital Security Act, 53 days into his disappearance.</p> <p>Bangladeshi writer Mushtaq Ahmed died languishing in prison without trial for 10 months, after he was detained under the Digital Security Act for criticising the Bangladeshi government's response to COVID-19 pandemic. The government's probe committee concluded that he died of natural causes, reportedly from a heart attack. He was denied bail at least six times. He should not have spent a single minute in prison let alone his final ones.</p>

Cartoonist Ahmed Kabir Kishore, who was arrested in the same case as Mushtaq Ahmed, was released a week after Mushtaq Ahmed died in prison. He told Amnesty International that he was forcibly disappeared from his Dhaka residence at least three days prior to the date in official records of his arrest. He also said that both Mushtaq Ahmed and he were tortured in custody of one or more state security agencies. On 10 March 2021, Ahmed Kabir Kishore filed a [case](#) with the metropolitan sessions judge's court in Dhaka, under the Torture and Custodial Death (Prevention) Act – 2013, seeking redress.

Bangladesh has not acceded to the International Convention for the Protection of All Persons Against Enforced Disappearance or the OP-CAT.

Theme: B52 Impunity

147.77 Protect human rights defenders and journalists from harassment by combating impunity and ensuring the prompt and impartial investigation of all violations against human rights defenders (Netherlands);
Source of position: A/HRC/39/12
- Para. 147

Supported

B52 Impunity
H1 Human rights defenders
D51 Administration of justice & fair trial
Affected persons:
- media
- human rights defenders

Not yet implemented

Labour rights activist Ruhul Amin, 35, has been detained at least three times between April 2018 and October 2020 for organizing protests against the Bangladeshi government's decision to shut down state-owned jute mills. He was last arrested on 26 February 2021 for posting on Facebook a call to protest in front of Bangladesh's National Parliament, the death of Bangladeshi writer Mushtaq Ahmed in prison. He was accused of attempting to deteriorate law and order under the Digital Security Act. He faces up to 7 years in prison if convicted.

Theme: D22 Extrajudicial, summary or arbitrary executions

<p>147.8 Promptly implement the recommendations accepted in the second cycle of the universal periodic review, on extrajudicial executions, and enforced disappearances, and against torture (France); Source of position: A/HRC/39/12 - Para. 147</p>	<p>Supported</p>	<p>D22 Extrajudicial, summary or arbitrary executions D25 Prohibition of torture and cruel, inhuman or degrading treatment D32 Enforced disappearances D33 Arbitrary arrest and detention A26 Cooperation with the Universal Periodic Review (UPR) Affected persons: - persons deprived of their liberty</p>	<p>Not yet implemented A 2019 report by Amnesty International documented allegations of enforced disappearance and extrajudicial executions associated with Bangladesh's anti-narcotics drive in 2018. The report also documented allegations against law enforcement agencies of making up evidence, especially witness statements after each incident. At least five witnesses interviewed by Amnesty International have said that they were involuntarily taken to the spot after the incident.</p>
<p><i>Theme: D25 Prohibition of torture and cruel, inhuman or degrading treatment</i></p>			
<p>148.12 Enhance efforts to prevent cases of torture and enforced disappearance and to prosecute perpetrators (Italy); Source of position: A/HRC/39/12/Add.1 - Para. 1</p>	<p>Supported</p>	<p>D25 Prohibition of torture and cruel, inhuman or degrading treatment D32 Enforced disappearances B52 Impunity Affected persons: - persons deprived of their liberty - disappeared persons</p>	<p>Not yet implemented Bangladesh has not ratified the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance. A 2019 investigation into allegations of extrajudicial executions, Amnesty International found out that all of them were subjected to enforced disappearances lasting between one day to month than a month before they were killed.</p>
<p>147.80 Ensure effective protection of the lives and security of human rights defenders and journalists against human rights violations, including enforced disappearance, torture and extrajudicial killings (Republic of Korea); Source of position: A/HRC/39/12 - Para. 147</p>	<p>Supported</p>	<p>D25 Prohibition of torture and cruel, inhuman or degrading treatment D32 Enforced disappearances H1 Human rights defenders Affected persons: - judges, lawyers and prosecutors - human rights defenders - disappeared persons</p>	<p>Not yet implemented A July 2021 briefing by Amnesty International found out that journalists, photojournalists, cartoonists, musicians, human rights defenders, entrepreneurs, teenage students and a farmer have been subjected to a wide range of human rights violations, including enforced disappearances, arbitrary detentions, torture and other ill treatment.</p>
<p><i>Theme: D26 Conditions of detention</i></p>			

<p>147.84 Consider measures to accelerate trial process with a view to reducing pending cases and the number of pretrial detainees as well as safeguarding their basic rights (Malaysia); Source of position: A/HRC/39/12 - Para. 147</p>	<p>Supported</p>	<p>D26 Conditions of detention D31 Liberty and security - general D51 Administration of justice & fair trial Affected persons: - persons deprived of their liberty</p>	<p>Not yet implemented</p> <p>More people are imprisoned under Bangladesh's draconian Digital Security Act than those who have been released. Bangladesh had at least 433 prisoners under the DSA as of 11 July 2021 with the longest serving prisoner being detained since 24 December 2018, according to the country's Department of Prisons. There were 358 prisoners under the law exactly one year ago. Many people detained under the Digital Security Act suffered detention for various periods even before their cases appear for trial.</p>
<p><i>Theme: D42 Freedom of thought, conscience and religion</i></p>			
<p>147.67 Protect freedom of expression in media, politics and religion, and work with civil society to address concerns regarding section 57 of the Information and Communication Technology Act (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland); Source of position: A/HRC/39/12 - Para. 147</p>	<p>Supported</p>	<p>D42 Freedom of thought, conscience and religion D43 Freedom of opinion and expression Affected persons: - media</p>	<p>Partly implemented</p> <p>Bangladesh has repealed Section 54, 55, 56, 57 and 66 of the Information and Communication Technology Act. However, the Digital Security Act introduced in October 2018 expanded some of the provisions taken out of the ICT Act into several sections in the DSA with punishment up to life imprisonment.</p>
<p>147.74 Continue efforts to protect freedom of expression and freedom of religion or belief for all citizens and residents, and to support civil society participation (Poland); Source of position: A/HRC/39/12 - Para. 147</p>	<p>Supported</p>	<p>D42 Freedom of thought, conscience and religion D43 Freedom of opinion and expression D45 Freedom of association Affected persons: - general</p>	<p>Not yet implemented</p> <p>Two folk musicians were charged with the vague and overbroad provision of hurting religious sentiment under the Digital Security Act. According to Bangladesh's Department of Prison, as of 11 July 2021 at least 40 persons were detained under Section 28 of the Act, which stipulates up to 10 years in prison for "hurting religious values or sentiment."</p>
<p><i>Theme: D43 Freedom of opinion and expression</i></p>			
<p>147.65 Take effective measures to ensure that the press can work free from the oppression by instances of censorship, threats, physical assaults and killings (Slovakia);</p>	<p>Supported</p>	<p>D43 Freedom of opinion and expression Affected persons: - media</p>	<p>Not yet implemented</p> <p>An analysis of print and online news by Amnesty International shows that more than 100 journalists have been sued under</p>

<p>Source of position: A/HRC/39/12 - Para. 147</p>			<p>Bangladesh's draconian Digital Security Act between January 2019 and July 2021, and at least 40 of them were arrested.</p>
<p>148.14 Review and redraft the proposed Digital Security Act to ensure online freedom of expression (Norway); Source of position: A/HRC/39/12/Add.1 - Para. 1</p>	Supported	<p>D43 Freedom of opinion and expression Affected persons: - general - media - human rights defenders</p>	<p>A July 2021 briefing by Amnesty International found out that writers, journalists, photojournalists and cartoonists have been subjected to a wide range of human rights violations, including enforced</p>
<p>148.15 Redraft the Digital Security Act in line with international norms and standards for freedom of expression (Sweden); Source of position: A/HRC/39/12/Add.1 - Para. 1</p>	Supported	<p>D43 Freedom of opinion and expression Affected persons: - general - media - human rights defenders</p>	<p>disappearances, arbitrary detentions, torture and other ill treatment.</p>
<p>147.66 Take prompt and effective measures to ensure that freedom of assembly and expression extends in practice — both online and offline — to all people, media, civil society and political parties, throughout the upcoming election campaign and beyond (Canada); Source of position: A/HRC/39/12 - Para. 147</p>	Supported	<p>D43 Freedom of opinion and expression D44 Right to peaceful assembly D7 Right to participation in public affairs and right to vote Affected persons: - media</p>	<p>Amnesty International has found a concerning pattern in which the authorities weaponized Sections 25 (publication of false or offensive information), 29 (Publication of defamatory information), and 31 (Offence and punishment for deteriorating law and order) of the Act to target and harass critical voices. According to the country's Department of Prison, Bangladesh had 185 prisoners under Section 25, 162 persons under Section 29 and 163 persons under Section 31 as of 11 July 2021. One prisoner may have been implicated in multiple charges.</p>
<p>147.73 Safeguard freedoms of political expression and association, without reprisals, censorship, intimidation or restrictive legal action, and that Bangladesh safeguard the independence of media (New Zealand); Source of position: A/HRC/39/12 - Para. 147</p>	Supported	<p>D43 Freedom of opinion and expression D45 Freedom of association Affected persons: - media</p>	<p>Labour rights activist Ruhul Amin, 35, has been detained at least three times between April 2018 and October 2020 for organizing protests against the Bangladeshi government's decision to shut down state-owned jute mills. He was last arrested on 26 February 2021 for posting on Facebook a call to protest in front of Bangladesh's National Parliament, the death of Bangladeshi writer Mushtaq Ahmed in prison. He was accused of attempting to deteriorate law and order under the Digital Security Act. He faces up to 7 years in prison if convicted.</p>
<p>147.70 Guarantee freedom of expression in the Digital Security Act (France); Source of position: A/HRC/39/12 - Para. 147</p>	Supported	<p>D43 Freedom of opinion and expression D46 Right to private life, privacy Affected persons: - media</p>	
<p>147.69 Take effective measures to ensure freedom of expression and end all assaults on journalists and human rights defenders, as well as ensure that the proposed Digital Security Act is in line with international standards (Estonia);</p>	Supported	<p>D43 Freedom of opinion and expression H1 Human rights defenders Affected persons: - general - media</p>	

<p>Source of position: A/HRC/39/12 - Para. 147</p>			<p>Bangladesh had at least 433 prisoners under the Digital Security Act as of 11 July 2021, mostly held on allegations of publishing “false or offensive information” under Section 25.</p> <p>Amnesty International has found a concerning pattern in which the authorities weaponized Sections 25 (publication of false or offensive information), 29 (Publication of defamatory information), and 31 (Offence and punishment for deteriorating law and order) of the Act to target and harass critical voices.</p> <p>According to the country’s Department of Prison, Bangladesh had 185 prisoners under Section 25, 162 persons under Section 29 and 163 persons under Section 31 as of 11 July 2021. One prisoner may have been implicated in multiple charges.</p>
<p>Theme: G5 Refugees & asylum seekers</p>			
<p>147.164 Continue efforts to host the forcibly displaced Myanmar nationals until they voluntarily return to their homeland in safety, security and dignity (Yemen); Source of position: A/HRC/39/12 - Para. 147</p>	<p>Supported</p>	<p>G5 Refugees & asylum seekers Affected persons: - refugees & asylum seekers</p>	<p>Implemented</p> <p>Bangladesh continues to host nearly one million Rohingya refugees. More than 740,000 of them arrived after 25 August 2017.</p>
<p>147.165 Continue to pursue strong efforts bilaterally as well as internationally and with help and assistance from the international community, for the sustainable resolution of the Rohingya crisis (Azerbaijan); Source of position: A/HRC/39/12 - Para. 147</p>	<p>Supported</p>	<p>G5 Refugees & asylum seekers A3 Inter-State cooperation & development assistance Affected persons: - refugees & asylum seekers</p>	<p>Partly implemented</p> <p>A UN resolution on the “Human Rights Situation of Rohingya Muslims and other Minorities in Myanmar” was adopted at the 47th session of the UN Human Rights Council in July 2021. The resolution called on the international community to provide humanitarian assistance until the Rohingya refugees can return to Myanmar. Bangladesh called on the international community to play a visible and effective role in ensuring that Rohingya refugees can return home with security and dignity. The international</p>
<p>147.166 Continue to work with international partners and Myanmar to find a sustainable solution that enables those displaced to return home voluntarily, safely and with dignity (New Zealand); Source of position: A/HRC/39/12 - Para. 147</p>	<p>Supported</p>	<p>G5 Refugees & asylum seekers A3 Inter-State cooperation & development assistance Affected persons: - refugees & asylum seekers</p>	<p>on the international community to provide humanitarian assistance until the Rohingya refugees can return to Myanmar. Bangladesh called on the international community to play a visible and effective role in ensuring that Rohingya refugees can return home with security and dignity. The international</p>

			<p>funding which secured 72 to 75% of the annual appeal in the first three years declined to 65% in 2020.</p>
<p>147.167 Continue to hold constructive dialogue with Myanmar and make efforts to implement the bilateral agreement, aiming at steady and rapid repatriation of refugees (Japan). Source of position: A/HRC/39/12 - Para. 147</p>	Supported	<p>G5 Refugees & asylum seekers A3 Inter-State cooperation & development assistance Affected persons: - refugees & asylum seekers</p>	<p>Not yet implemented</p> <p>The conditions in Myanmar are not conducive for the “safe, dignified, voluntary and sustainable” returns of the Rohingya refugees. Rohingya people in Bangladesh overwhelmingly wish to return home when it is safe for them to do so. Crucially, they have a right to participate in the decisions that affect them.</p> <p>Accountability is an essential component of these conditions.</p> <p>Even before the coup, the circumstances in Myanmar were anything but conducive to those conditions. Returns must follow the principle of non- refoulement which is binding upon all states.</p>
<p>148.22 Continue improving Rohingya refugees’ conditions and investigating allegations of abuses and human rights violations against them in accordance with international standards (Holy See); Source of position: A/HRC/39/12/Add.1 - Para. 1</p>	Supported	<p>G5 Refugees & asylum seekers A3 Inter-State cooperation & development assistance D51 Administration of justice & fair trial Affected persons: - refugees & asylum seekers</p>	<p>Partly implemented</p> <p>Bangladesh is host to nearly one million Rohingya refugees. In Bangladesh, the Rohingya men, women, and children found a second chance at life. The country in January 2020 committed to provide Rohingya children with access to education in Myanmar curriculum.</p> <p>Access to education for Rohingya refugees from Myanmar improved during the year despite some early setbacks. Between December 2021 and April 2022, the government reportedly shut down and dismantled about 30 community-led schools. Rohingya refugees alleged that some schoolteachers were detained by the Armed Police Battalion and released only after signing a paper confirming that they would stop teaching. In May, the situation improved</p>

when UNICEF reported enrolling 10,000 Rohingya children in the Myanmar Curriculum Pilot, which sought to provide Rohingya children with education based on the national curriculum of their home country. This had been a key demand from humanitarian actors since the start of the refugee crisis. However, UNICEF estimated that, of the more than 400,000 school-aged Rohingya children in Bangladesh's refugee camps, 100,000 were not yet attending learning centres. On 19 June, the day before World Refugee Day, tens of thousands of Rohingya refugees held a demonstration named "Bari Cholo" (Let Us Go Home) spanning 23 camps in Ukhia and Teknaf. Despite concerns from the international community and human rights groups, the Bangladesh government persisted in its plans to relocate at least 100,000 Rohingya refugees to the remote and flood-prone Bhasan Char island.

In October, 963 Rohingya refugees were relocated to Bhasan Char, bringing the total number to 30,079, according to official figures. Refugees attempting to flee the remote island were reportedly detained by police, raising doubts as to the voluntary nature of the relocation.

Amnesty International documented allegations of sexual abuse on the island by security officials. Instead of commissioning a prompt and impartial investigation into the allegations, the authorities vehemently refused.

On 5 March, a massive fire broke out in the afternoon in Cox's Bazar area of Bangladesh, which is the largest refugee camp in the world. The fire destroyed around

			2000 shelters and left around 12000 Rohingya refugees homeless. Since January 2021, there have been more than 200 fire incidents in the Rohingya camps including 60 cases of arson.
Theme: H1 Human rights defenders			
147.76 Guarantee the security of human rights defenders (France); Source of position: A/HRC/39/12 - Para. 147	Supported	H1 Human rights defenders Affected persons: - human rights defenders	Not yet implemented Human rights defenders are often demonised, harassed, intimidated and arrested for organizing movements.
147.23 Ensure that police officers are adequately trained and instructed to investigate reports of harassment, attacks and death threats against journalists, media workers, human rights defenders and activists and ensure the protection of those under threat in accordance with international human rights law (Finland); Source of position: A/HRC/39/12 - Para. 147	Supported	H1 Human rights defenders A43 Human rights policies A54 Awareness raising and dissemination A53 Professional training in human rights Affected persons: - media - human rights defenders	On 26 February 2021, Labour rights activist Ruhul Amin posted on Facebook a call to protest against the death of writer Mushtaq Ahmed in prison. Police arrested him on charges of “attempting to deteriorate law and order” under the DSA. He faces up to seven years in prison if convicted. On 28 May 2021, police arrested Shahnewaz Chowdhury, an engineer and rights defender for a Facebook post where he shared his personal opinion that was critical about a power plant in his area.
147.78 Ensure that human rights defenders, journalists and civil society have a safe and enabling environment and can operate freely without fear of reprisals (Norway); Source of position: A/HRC/39/12 - Para. 147	Supported	H1 Human rights defenders D43 Freedom of opinion and expression D45 Freedom of association Affected persons: - media - human rights defenders	Human rights groups said that in some cases they have been denied permission to host peaceful assembly. The government has curtailed operations of local human rights organizations such as Odhikar under laws such as the “Foreign Donations (Voluntary Activities) Regulation Act 2016”.
147.75 Publicly commit to ensuring that journalists, bloggers, human rights defenders and civil society organizations are able to carry out their activities without fear of surveillance, intimidation, harassment, arrest, prosecution or retribution (Austria); Source of position: A/HRC/39/12 - Para. 147	Supported	H1 Human rights defenders D46 Right to private life, privacy D43 Freedom of opinion and expression Affected persons: - media - human rights defenders	
Theme: A24 Cooperation with special procedures			
149.19 Issue and implement a standing invitation to all special procedures (Czechia); Source of position: A/HRC/39/12 - Para. 149	Noted	A24 Cooperation with special procedures Affected persons: - general	Not yet implemented Despite noting the request to cooperate with special procedures, no progress has been made with regards to

			implementing a standing invitation to all special procedures.
149.20 Respond positively to pending visit requests by special procedure mandate holders of the Human Rights Council and consider extending a standing invitation to all mandate holders (Latvia); Source of position: A/HRC/39/12 - Para. 149	Noted	A24 Cooperation with special procedures Affected persons: - general	Not yet implemented With exception of accepting visits by the UN Special Rapporteur on Myanmar since the last UPR, Bangladesh has not granted visits to any other requests made by the Special Procedures. There are at least 17 pending visit requests and five other requests that were not followed up.
Theme: A41 Constitutional and legislative framework			
149.46 Revise media laws, in consultation with civil society, to decriminalize “defamation” and “hurting religious sentiment”, and limit proposed extended jail terms for these offences (United States of America); Source of position: A/HRC/39/12 - Para. 149	Noted	A41 Constitutional and legislative framework D42 Freedom of thought, conscience and religion D43 Freedom of opinion and expression Affected persons: - media	Not yet implemented In March 2022, a teacher in Munshiganj district was arrested for “hurting religious sentiments” by discussing the difference between science and religion in class, after a complaint was made by the school’s office assistant. After his release 19 days later, the teacher told media that he felt he was “framed” because of internal conflicts in the school
149.45 Decriminalize defamation and include it in the Civil Code in accordance with international standards, and take steps to create an independent broadcast licensing authority (Estonia); Source of position: A/HRC/39/12 - Para. 149	Noted	A41 Constitutional and legislative framework D43 Freedom of opinion and expression Affected persons: - general - media	Not yet implemented Cases against six out of 10 individuals analysed by Amnesty International featured criminal defamation charges, where the complainant was either a law enforcement official or someone else other than the person said to be defamed. In those cases, the authorities also included assumption that social media posts by the individuals were “about to” deteriorate law and order. Satire and criticism were treated as false, offensive or derogatory information under the law. In one case, a farmer, who cannot read or write, was initially implicated with defamation

			charges under Bangladesh's draconian Digital Security Act. However, after failing to corroborate any evidence against the farmer of using a digital platform, police on 15 April 2021 charged him for defamation under Bangladesh's Penal Code 1860. If convicted, he faces up to two years in jail.
149.49 Repeal the Information and Communication Technology Act (2006), as amended in 2013, or modify the Information and Communication Technology Act to bring it in line with international law and standards (Greece); Source of position: A/HRC/39/12 - Para. 149	Noted	A41 Constitutional and legislative framework D43 Freedom of opinion and expression Affected persons: - general - media	Implemented Bangladesh has repealed Section 54, 55, 56, 57 and 66 of the Information and Communication Technology Act and therefore, amended the ICT Act provisions that were mostly used in contravention of international human rights law.
<i>Economic and Social Rights and the Right to Development</i>			
147.96 Step up efforts made to improve economic and social rights, notably through follow-up to the 2021 vision and the five-year plan (2016–2021) (Morocco) Source of position: A/HRC/39/12 - Para. 147	Supported	E Economic, social and cultural rights S08 SDG 8 - economic growth, employment, decent work Affected persons: - general	Partly implemented While Bangladesh has been hailed as a model for poverty reduction, its tax:GDP ratio has been on a downward trend resulting in limited resources to realise human development. Bangladesh should review its tax exemptions (including within its tax treaties) to ensure they do not disproportionately limit the maximum available revenue available to government to realise human rights and development. It should also zero-rate essential commodities such as medicines and sanitary pads and equitably expand the tax base by strengthening taxes on wealth. Additionally, Bangladesh should develop strong policy and legal measures to tackle illicit financial flows.

NOTAS

¹ Consejo de Derechos Humanos, *Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal: Bangladesh*, doc. ONU A/HRC/39/12, recomendación 148.3 (Australia) y su Adición A/HRC/39/12/Add.1, párr. 1.

² A/HRC/39/12, recomendación 148.12 (Italia) y su Adición A/HRC/39/12/Add.1, párr. 1.

³ A/HRC/39/12, recomendación 147.54 (Suiza).

⁴ A/HRC/39/12, recomendación 149.20 (Letonia).

⁵ A/HRC/39/12, recomendaciones 147.66 (Canadá) y 147.71 (Suiza).

⁶ Amnistía Internacional, *Bangladesh: Bangladesh authorities must conduct prompt, thorough, impartial, and independent investigations into the death of protesters and respect people's right to peaceful assembly*, 1 de abril de 2021, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/04/bangladesh-protests-statement/>.

⁷ A/HRC/39/12, recomendaciones 149.5 (Japón, Bosnia y Herzegovina, Irak, Senegal, Togo, Ucrania, Perú) y 149.6 (Grecia).

⁸ Puede consultarse una traducción oficial en inglés en: <https://www.cirt.gov.bd/wp-content/uploads/2020/02/Digital-Security-Act-2020.pdf>.

⁹ Amnistía Internacional, *No Space for Dissent – Bangladesh's Crackdown on Freedom of Expression Online* (2021), <http://www.amnesty.org/es/documents/asa13/4294/2021/en/>.

¹⁰ Gobierno de Bangladesh, Departamento Legislativo y Administrativo, Ley de control de estupefacientes, 2018 (Ley núm. 63 de 2018), <http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-details-1276.html>.

¹¹ Ley de Eliminación de la Violencia contra Mujeres y Menores (reforma), 2020 (Ley núm. 22 de 2020), <http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1351.html>.

¹² Coalición para la reforma de la ley de la violación, *Rape Law Reform: 10-Point Demand* (2020), https://blast.org.bd/content/Rape%20Law%20Reform/RLRN_10-POINT-DEMANDS-ENG-FINAL.pdf.

¹³ Concretamente, no ha presentado los informes correspondientes al Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y de sus Familiares (requerido para el 1 de mayo de 2022), al Comité de Derechos Civiles y Políticos (CCPR) (requerido para el 29 de marzo de 2021), al Comité de los Derechos del Niño (requerido para el 1 de marzo de 2021) y al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (requerido para el 30 de noviembre de 2020). En 2019, Bangladesh presentó su primer informe al Comité contra la Tortura (CAT), con casi 20 años de retraso. Véase: Estado de la presentación de informes para Bangladesh, Base de datos de los órganos de tratados de las Naciones Unidas (consultado el 12 de febrero de 2023), https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/countries.aspx?CountryCode=BGD&Lang=ES.

¹⁴ La CNDH se estableció mediante la Ley de la CNDH de 2009.

¹⁵ Asian NGO Network on National Human Rights Institutions (ANNI), *Bangladesh: The Government must amend the National Human Rights Commission Act 2009, with a view to broadening its mandate to protect and promote human rights*, 25 de marzo de 2022, <https://forum-asia.org/?p=36710>.

¹⁶ *Human Rights Statistics*, Comisión Nacional de Derechos Humanos de Bangladesh, <http://www.nhrc.org.bd/site/page/81b1aef5-ce8c-4465-a11c-cd8d0a691288/> (consultado el 20 de marzo de 2023). Por lo tanto, el seguimiento de los medios de comunicación sobre los incidentes documentados y las estadísticas publicadas por las ONG de derechos humanos ubicadas en Bangladesh (muchas de las cuales se basan también principalmente en informes de los medios de comunicación) son fuentes importantes para evaluar la situación de los derechos humanos.

¹⁷ El artículo 18 de la Ley de la CNDH de 2009 impide a ésta iniciar una investigación independiente sobre quejas recibidas contra una “fuerza disciplinada”, lo cual incluye a la policía y a las fuerzas armadas. En su lugar, la Comisión sólo puede pedir informes a la fuerza contra la que se presenta la queja; pero la Ley guarda silencio sobre las medidas que puede tomar si esa fuerza no presenta ningún informe, como sucede con frecuencia. Esto contrasta con el artículo 17, que faculta a la CNDH a iniciar una investigación independiente de las quejas relativas a otras autoridades estatales si éstas no presentan los informes a tiempo.

¹⁸ *The Business Standard*, “12 years on, NHRC now wants to probe rights violation complaints against police”, 13 de marzo de 2021, <https://www.tbsnews.net/bangladesh/12-years-nhrc-now-wants-probe-rights-violation-complaints-against-police-215569>.

¹⁹ *New Age Bangladesh*, “23,968 arrested in countrywide spl drive: PHQ”, 19 de diciembre de 2022, <http://newagebd.net/article/189467/23968-arrested-in-countrywide-spl-drive-phq>.

²⁰ Front Line Defenders, CIVICUS y SAHR, *Crushing Student Protests: Bangladesh's Repression of the Quota Reform and Road Safety Movements* (2020), https://www.frontlinedefenders.org/sites/default/files/report_-_june_2020_compressed.pdf; *The Daily Star*, “BCL in its element”, 5 de agosto de 2018, <https://www.thedailystar.net/city/bcl-ruling-party-men-attack-student-protest-road-safety-jigatola-dhanmondi-dhaka-1615828>.

- ²¹ Amnistía Internacional, *Bangladesh: Bangladesh authorities must conduct prompt, thorough, impartial, and independent investigations into the death of protesters and respect people's right to peaceful assembly*, 1 de abril de 2021, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/04/bangladesh-protests-statement/>.
- ²² *The Business Standard*, "Police clash with protesting SUST students, 30 injured", 16 de enero de 2022, <https://www.tbsnews.net/bangladesh/education/police-clash-protesting-sust-students-30-injured-358291>.
- ²³ *Bdnews24*, "Garment workers, police clash over decision to shut factory in Gazipur", 1 de febrero de 2022, <https://bdnews24.com/bangladesh/garment-workers-police-clash-over-decision-to-shut-factory-in-gazipur>.
- ²⁴ *Dhaka Tribune*, "Leftists' hartal marked by police action", 28 de marzo de 2022, <https://www.dhakatribune.com/bangladesh/2022/03/28/leftists-hartal-marked-by-police-action>.
- ²⁵ Amnistía Internacional, *Bangladesh: Authorities must end repression of demonstrations*, 8 de diciembre de 2022, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/12/bangladesh-authorities-must-end-repression-of-demonstrations/>.
- ²⁶ El partido acababa de anunciar su intención de organizar una concentración política para exigir la dimisión del partido gobernante a fin de que un gobierno provisional neutral pudiera supervisar las futuras elecciones de 2023. Amnistía Internacional, *Bangladesh: Authorities must end repression of demonstrations*, 8 de diciembre de 2022, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/12/bangladesh-authorities-must-end-repression-of-demonstrations/>.
- ²⁷ El artículo 144 del Código de Procedimiento Penal de 1898 faculta a las personas titulares de una magistratura para ordenar la prohibición de reuniones públicas. Para consultar las estadísticas sobre el uso del artículo 144 recopiladas por la ONG Ain O Salish Kendra (ASK), véase: askbd.org/ask/2020/01/06/imposed-section-144-jan-dec-2019/; askbd.org/ask/2020/12/31/imposed-section-144-jan-dec-2020/; askbd.org/ask/2022/01/12/imposed-section-144-jan-dec-2021/; askbd.org/ask/2023/01/03/imposed-section-144-jan-dec-2022/.
- ²⁸ Amnistía Internacional, *Informe Global de Amnistía Internacional: Condenas a muerte y ejecuciones en 2022* (de próxima publicación, en abril de 2023).
- ²⁹ Amnistía Internacional, *No Space for Dissent – Bangladesh's Crackdown on Freedom of Expression Online*, 26 de julio de 2021, <https://www.amnesty.org/es/documents/asa13/4294/2021/en/>.
- ³⁰ Amnistía Internacional, *Bangladesh: Caricaturista torturado y escritor muerto en prisión: Ahmed Kabir Kishore*, 8 de marzo de 2021, <https://www.amnesty.org/es/documents/asa13/3800/2021/es/> pp. 1-2.
- ³¹ Amnistía Internacional, *Bangladesh: New data protection bill threatens people's right to privacy*, 27 de abril de 2022, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/04/bangladesh-new-data-protection-bill-threatens-peoples-right-to-privacy/>.
- ³² Amnistía Internacional, *Killed in "crossfire": Allegations of extrajudicial executions in Bangladesh in the guise of a war on drugs* (2019), <https://www.amnesty.org/es/documents/asa13/1265/2019/en/>.
- ³³ Amnistía Internacional, *Killed in "crossfire": Allegations of extrajudicial executions in Bangladesh in the guise of a war on drugs* (2019), <https://www.amnesty.org/es/documents/asa13/1265/2019/en/>.
- ³⁴ Se ha utilizado un seudónimo en lugar del nombre real de la víctima para proteger su intimidad y la de su familia.
- ³⁵ Amnistía Internacional, *Killed in "crossfire": Allegations of extrajudicial executions in Bangladesh in the guise of a war on drugs* (2019), <https://www.amnesty.org/es/documents/asa13/1265/2019/en/>. A Suleman le costaba llegar a fin de mes y se apoyaba en sus hermanos para pagar alimentos y otros gastos. Sus familiares comunicaron a Amnistía Internacional que, tras ser detenido por las autoridades, Suleman llamó a un pariente, le dijo que la policía exigía 20.000 takas (unos 200 euros) por su liberación y pidió a la familia que reuniera el dinero.³⁵ Una vez pagada esta suma, la policía exigió otros 50.000 takas (unos 500 euros), "o de lo contrario me matarán", indicó Suleman a su familiar. La familia, desesperada por localizar a Suleman, acudió a una comisaría de policía, donde se le informó de que lo habían trasladado a prisión. Tres o cuatro días después de la última llamada, les dijeron que Suleman había muerto en un "tiroteo". También hubo graves acusaciones contra las fuerzas de seguridad de haber falseado las declaraciones de los testigos respecto a esos "tiroteos".
- ³⁶ Amnistía Internacional, *Killed in "crossfire": Allegations of extrajudicial executions in Bangladesh in the guise of a war on drugs* (2019), <https://www.amnesty.org/es/documents/asa13/1265/2019/en/>. Los testigos afirmaron no haber podido negarse a las peticiones de la policía por temor a las duras consecuencias. Las fuerzas de seguridad recogieron firmas, nombres, números de teléfono y datos personales de los testigos y posteriormente, los llamaron para verificar sus declaraciones o los citaron en sus dependencias para que declararan sobre lo "presenciado".
- ³⁷ Odhikar, *Annual Human Rights Report Bangladesh 2022* (2023), p. 4.
- ³⁸ Amnistía Internacional, *No Space for Dissent – Bangladesh's Crackdown on Freedom of Expression Online*, 26 de julio de 2021, <http://www.amnesty.org/es/documents/asa13/4294/2021/en/> p. 6.
- ³⁹ Amnistía Internacional, *No Space for Dissent – Bangladesh's Crackdown on Freedom of Expression Online*, 26 de julio de 2021, <http://www.amnesty.org/es/documents/asa13/4294/2021/en/> p. 6.
- ⁴⁰ Netra News, *Netra Report, Secret prisoners of Dhaka*, 14 de agosto de 2022, <https://netra.news/2022/secret-prisoners-of-dhaka/>.

⁴¹ Entre ellas, celdas sin ventanas con ventiladores de gran tamaño encendidos prácticamente siempre para amortiguar cualquier otro sonido.

⁴² *Daily Star*, “Report on DGFI: Ex-army man, Netra News sued under the DSA”, 25 de agosto de 2022, <https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/crime-justice/news/report-dgfi-ex-army-man-netra-news-sued-under-the-dsa-3102461>.

⁴³ *Daily Star*, “Report on DGFI: Ex-army man, Netra News sued under the DSA”, 25 de agosto de 2022, <https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/rights/news/ensuring-equal-rights-anti-discrimination-bill-2022-placed-parliament-2998501>.

⁴⁴ *Daily Star*, “Bhola clash: Hacker identified thru’ Facebook”, 24 de octubre de 2019, <https://www.thedailystar.net/country/bhola-clash-hacker-identified-thru-facebook-1818175>.

⁴⁵ *Bdnews24*, “Muradnagar controversy was resolved through talks, or so it seemed. Then came arson attacks”, 3 de noviembre de 2020, <https://bdnews24.com/bangladesh/bangladesh-bans-public-gatherings-in-cumilla-locality-after-attacks-on-hindu-homes>.

⁴⁶ *Bdnews24*, “Muradnagar controversy was resolved through talks, or so it seemed. Then came arson attacks”, 3 de noviembre de 2020, <https://bdnews24.com/bangladesh/hifazat-men-attack-loot-homes-of-hindus-in-sunamganj-over-facebook-post>.

⁴⁷ *Bdnews24*, “Bangladesh vows action as communal tension flares”, 13 de octubre de 2021, <https://bdnews24.com/bangladesh/bangladesh-vows-action-as-communal-tension-flares>.

⁴⁸ *Business Standard*, “Hindus attacked in Narail over Facebook post”, 16 de julio de 2022, <https://www.tbsnews.net/bangladesh/hindus-attacked-narail-over-facebook-post-459402>.

⁴⁹ *Daily Star*, “DSA Case: Poritosh gets 5 years in jail”, 9 de febrero de 2023, <https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/crime-justice/news/dsa-case-poritosh-gets-5-years-jail-3242776>.

⁵⁰ *Daily Star*, “Accused in DSA Case: Teen spends 8 months in solitary confinement”, 8 de febrero de 2023, <https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/crime-justice/news/accused-dsa-case-teen-spends-8-months-solitary-confinement-3241801>.

⁵¹ *Bdnews24*, “Bangladesh sentences man who incited violence in 2021 by placing Quran at puja venue”, 2 de marzo de 2023, <https://bdnews24.com/bangladesh/zeu6gf31sn>.

⁵² Partido político que movilizó la resistencia de los pueblos indígenas durante el conflicto que llevó a la firma del Acuerdo de CHT.

⁵³ Amnistía Internacional, *Bangladesh: Fully implement rights provisions of the Chittagong Hill Tracts Peace Accord*, 11 de diciembre de 2020, <https://www.amnesty.org/es/documents/asa13/3407/2020/en/>.

⁵⁴ *New Age Bangladesh*, “UN reps seek probe into death of minority leader”, 8 de octubre de 2022, <https://www.newagebd.net/article/183109/un-reps-see-probe-into-death-of-minority-leader>.

⁵⁵ *New Age Bangladesh*, “Int’l CHT Commission concerned over deployment of APBn in CHT”, 29 de mayo de 2022, <https://www.newagebd.net/article/171841/intl-cht-commission-concerned-over-deployment-of-apbn-in-cht>.

⁵⁶ Amnistía Internacional, *Cualquier marejada podría ahogarnos. Historias de la crisis climática* (2022), pp. 20-30 <https://www.amnesty.org/es/documents/IOR40/6145/2022/es/>.

⁵⁷ Amnistía Internacional, *Bangladesh: Restore and strengthen capacity of community-led schools in Rohingya camps*, 28 de abril de 2022, <https://www.amnesty.org/es/latest/news/2022/04/bangladesh-restore-and-strengthen-capacity-of-community-led-schools-in-rohingya-camps/>.

⁵⁸ Amnistía Internacional, *Bangladesh: Restore and strengthen capacity of community-led schools in Rohingya camps*, 28 de abril de 2022, <https://www.amnesty.org/es/latest/news/2022/04/bangladesh-restore-and-strengthen-capacity-of-community-led-schools-in-rohingya-camps/>.

⁵⁹ *Daily Star*, “963 more Rohingyas relocated to Bhasan Char”, 17 de octubre de 2022, <https://www.thedailystar.net/rohingya-influx/news/963-more-rohingyas-relocated-bhasan-char-3145186>.

⁶⁰ *Star Digital Report*, “8 Rohingyas held while trying to flee Bhasan Char”, 15 de abril de 2022, <https://www.thedailystar.net/rohingya-influx/news/8-rohingyas-held-while-trying-flee-bhasan-char-3005091>.

⁶¹ *Daily Star*, “Star Digital Report, Global report on internet shutdowns: Bangladesh ranked 5th”, 1 de marzo de 2023, <https://www.thedailystar.net/tech-startup/science-gadgets-and-tech/tech-news/news/global-report-internet-shutdowns-bangladesh-ranked-5th-3260651>.

⁶² El artículo 144 del Código de Procedimiento Penal de 1898 faculta a las personas titulares de una magistratura para ordenar la prohibición de reuniones públicas. Para consultar las estadísticas sobre el uso del artículo 144 recopiladas por la ONG Ain O Salish Kendra (ASK), véase: <https://www.askbd.org/ask/2020/01/06/imposed-section-144-jan-dec-2019/>; <https://www.askbd.org/ask/2020/12/31/imposed-section-144-jan-dec-2020/>;

<https://www.askbd.org/ask/2022/01/12/imposed-section-144-jan-dec-2021/>;

<https://www.askbd.org/ask/2023/01/03/imposed-section-144-jan-dec-2022/>.

⁶³ Amnistía Internacional, *Bangladesh authorities must conduct prompt, thorough, impartial, and independent investigations into the death of protesters and respect people's right to peaceful assembly*, 1 de abril de 2021, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/04/bangladesh-protests-statement/>.

⁶⁴ *Prothom Alo*, "Jubo Dal activist killed in police-BNP clash in Narayanganj", 1 de septiembre de 2022, <https://en.prothomalo.com/bangladesh/politics/dhkuzp111f>.